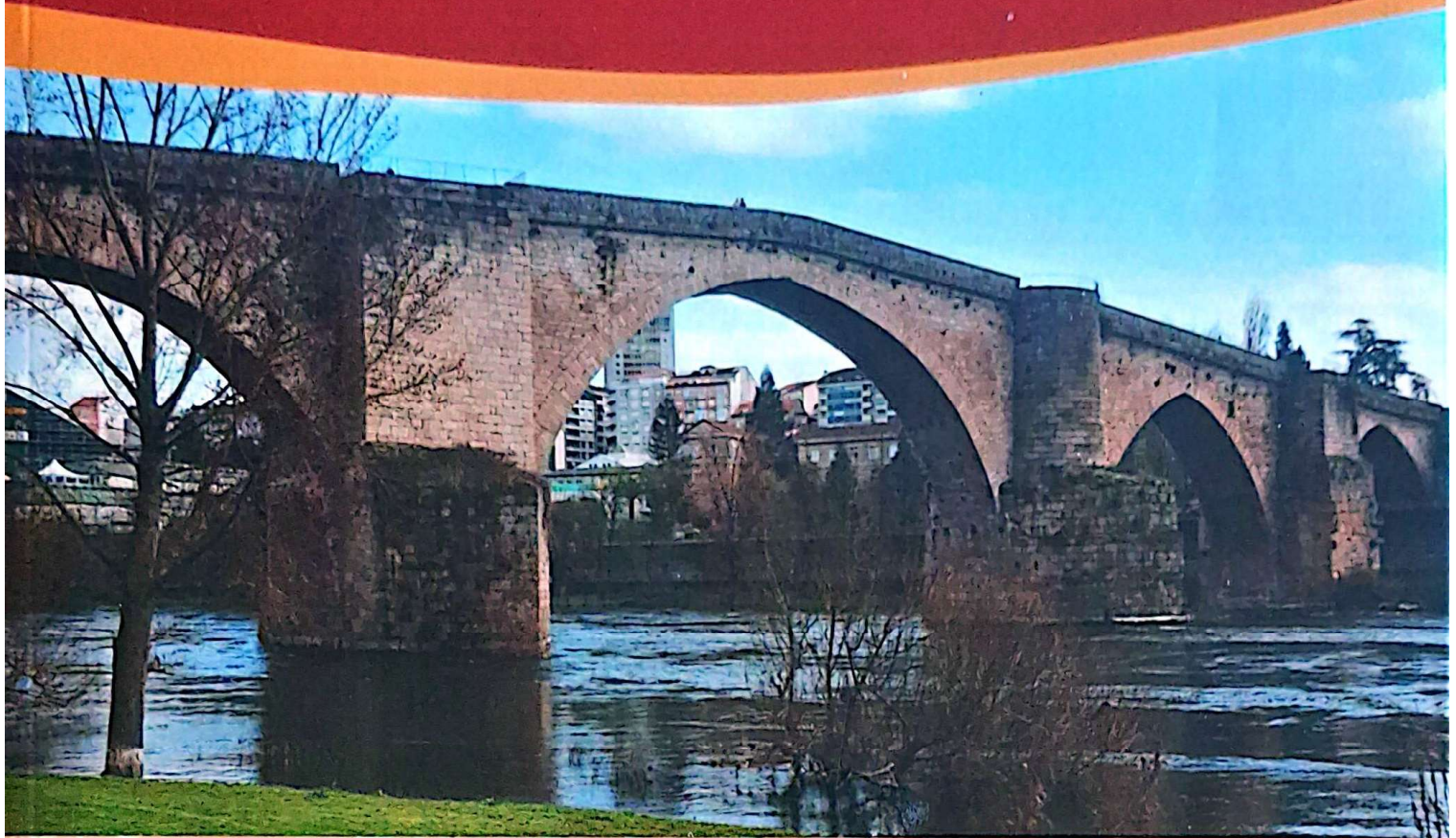


Esther Pillado González (Dir.)
M^a. Dolores Fernández Fustes (Coord.)



DERECHO PROCESAL Y CIUDADANÍA

RETOS SOCIOECONÓMICOS Y POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

**Atelier**
LIBROS JURÍDICOS



FUNDACIÓN PRIVADA
**MANUEL
SERRA
DOMÍNGUEZ**

Esther Pillado González
M^a Dolores Fernández Fustes
Directoras

Derecho procesal y ciudadanía:

Retos socioeconómicos y Politización de la justicia

AUTORES

Juan Manuel Alonso Furelos
Miguel Álvarez Hernández
Jorge Alves Costa
Coral Arangüena Fanego
Teresa Armenta Deu
Pablo Azaústre Ruiz
Serena Cacciatore
Gabriel Caro Herrero
Adán Carrizo González-Castell
Juan Damián Moreno
Angelo Danilo De Santis
André Luiz de Almeida Mendonça
José Francisco Etxeberria Guridi
Tomás Farto Piay
Jackeline Flores Martín
Giovanni Fonte Mendoza
Gemma García-Rostán Calvin
Ana I. González Fernández
Juan F. Herrero Perezagua
Andrea Jamardo Lorenzo
María Nieves Jiménez López
Carmen Ladrón de Guevara Pascual
Alberto José Lafuente Torralba
Mercedes Llorente Sánchez-Arjona
Fernando Martín Diz

Andrea Martín Meneses
Paula Martínez Molares
Mar Montón García
Lidón Montón García
Víctor Moreno Catena
Pablo Muyo Bussac
Jessica Naranjo Rodríguez
Ana María Neira Pena
Marina Oliveira Teixeira dos Santos
Juan Carlos Ortiz-Pradillo
Blanca Otero Otero
Oliver Pascual Suaña
Luis Miguel Pérez Aguilera
Francesc Pérez Tortosa
Joan Picó Junoy
Esther Pillado González
Andrea Planchadell-Gargallo
Virginia Ramos Febrer
Nicolás Rodríguez-García
Belén Romero García-Aranda
Selena Tierno Barrios
Luis M. Uriarte Valiente
Lurdes Varregoso Mesquita
Ana María Vicario Pérez
Irene Yáñez García-Bernalt

 **Atelier**
LIBROS JURÍDICOS

Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 270, 271 y 272 del Código Penal vigente, podrá ser castigado con pena de multa y privación de libertad quien reprodujere, plagiare, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

Este libro ha sido sometido a un riguroso proceso de revisión por pares.

© 2025 Los autores

© 2025 Atelier

Santa Dorotea 8, 08004 Barcelona

e-mail: editorial@atelierlibros.es

www.atelierlibrosjuridicos.com

Tel. 93 295 45 60

I.S.B.N.: 979-13-87867-05-8

Depósito legal: B 12835-2025

Diseño de la colección y de la cubierta: Eva Ramos

Diseño y composición: Addenda, Pau Claris 92, 08010 Barcelona
www.addenda.es

Impresión: Winihard

Índice

PROGRAMA DEL MEMORIAL	13
PRÓLOGO	17
<i>Esther Pillado González</i>	

I. MÁS ALLÁ DE LA DEFENSA DEL INTERÉS INDIVIDUAL EN EL PROCESO CIVIL

ACCIONES COLECTIVAS Y EL CASO «DIESELGATE»	23
<i>Angelo Danilo De Santis</i>	
MÁS ALLÁ DE LA DEFENSA DEL INTERÉS INDIVIDUAL EN EL PROCESO CIVIL: HACIA LA TUTELA EFECTIVA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	37
<i>Andrea Planchadell-Gargallo</i>	
LEGITIMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EN DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE EN PROCESOS POR DAÑOS CAUSADOS AL ENTORNO NATURAL. LIMITACIONES EN EL ORDENAMIENTO EUROPEO Y ESPAÑOL	61
<i>Ana María Vicario Pérez</i>	
LA TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL RECURSO DE CASACIÓN CIVIL TRAS SU REFORMA EN TÉRMINOS DE EFICIENCIA Y OBJETIVACIÓN (ART. 477.2 LEC)	87
<i>Dr. Gabriel Caro Herrero</i>	
LITIGIO ESTRATÉGICO Y ACCESO IGUALITARIO A LA JUSTICIA	103
<i>Adán Carrizo González-Castell</i>	

¿CAZARRECOMPENSAS PROTEGIENDO A LOS CONSUMIDORES? CONSIDERACIONES SOBRE LA FINANCIACIÓN POR TERCEROS DE ACCIONES COLECTIVAS	149
<i>Alberto José Lafuente Torralba</i>	

II. PROTECCIÓN PROCESAL CIVIL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

EL PROCESO COMO CAUCE PARA LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE VIVIENDA	153
<i>Gemma García-Rostán Calvín</i>	
AJUSTES EN EL PROCESO CIVIL POR RAZÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LOS LITIGANTES	153
<i>Juan F. Herrero Perezagua</i>	
MEDIDAS CIVILES PARA LA PROTECCIÓN A LOS MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	177
<i>Mercedes Llorente Sánchez-Arjona</i>	
A PROTECÇÃO DOS VULNERÁVEIS NO PROCESSO CIVIL PORTUGUÊS: JUSTIÇA INCLUSIVA OU DESCOMPROMISSO COM A INCLUSÃO?	203
<i>Lurdes Varregoso Mesquita</i>	
UNA VISIÓN PUNTUAL DE LAS GARANTÍAS DEL DEMANDADO EN EL PROCESO CIVIL DE DESAHUCIO A TRAVÉS DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL	233
<i>Jackeline Flores Martín</i>	
HABEAS CORPUS Y PROCESO CIVIL	247
<i>Giovanni Fonte Mendoza</i>	
LOS MASC COMO VÍA HACIA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	259
<i>Ana I. González Fernández</i>	
VULNERABILIDAD Y DERECHO PROCESAL: HACIA UNA ESPECIAL PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA	269
<i>María Nieves Jiménez López</i>	
EL BENEFICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA: ¿ES SIEMPRE UNA FÓRMULA DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL PROCESO CIVIL?	277
<i>Andrea Martín Meneses</i>	

EL FACILITADOR PROCESAL: HACIA UNA JUSTICIA MÁS ACCESIBLE	289
<i>Lidón Montón García</i>	

CONSIDERACIONES SOBRE EL FACILITADOR PROCESAL A LA LUZ DE LA NORMATIVA AUTONÓMICA MADRILEÑA	305
<i>Pablo Muyo Bussac</i>	

SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE COLABORACIÓN INTERPROFESIONAL O DE «MESA REDONDA» EN EL EXPEDIENTE DE PROVISIÓN DE APOYOS PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.	317
<i>Jessica Naranjo Rodríguez</i>	

CONTRA LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS MENORES DE EDAD NO EMANCIPADOS EN EL PROCESO CIVIL	329
<i>Luis Miguel Pérez Aguilera</i>	

DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA PARAPROCESAL: LOS E-MASC CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	339
<i>Francesc Pérez Tortosa</i>	

LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE DESAMPARO DE MENORES	347
<i>Virginia Ramos Febrer</i>	

HITO PARA LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN EN ESPAÑA. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 4370/2024 DE LA SALA 1ª DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 QUE EQUIPARA LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN CON LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN ARAS A LA PROTECCIÓN DEL MENOR Y LA NO DISCRIMINACIÓN.	359
<i>Belén Romero García-Aranda</i>	

III. ASPECTOS PROCESALES DE LA CIBERDELINCUENCIA

EL REGLAMENTO E-EVIDENCE Y LAS ÓRDENES EUROPEAS DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN A EFECTOS DE PRUEBA ELECTRÓNICA EN PROCESOS PENALES.	377
<i>Coral Arangüena Fanego</i>	

LA IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA EN LA INVESTIGACIÓN Y PRUEBA DE LA CIBERDELINCUENCIA DESDE EL ENFOQUE DEL REGLAMENTO PRÜM II Y DEL REGLAMENTO DE IA	403
<i>José Francisco Etxeberria Guridi</i>	

UNA APROXIMACIÓN A LA CONFIGURACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA TECNOLÓGICA	44
<i>Andrea Jamardo Lorenzo</i>	
ANÁLISIS DE LA SENTENCIA ENCROCHAT. LA TRANSMISIÓN DE LA PRUEBA ELECTRÓNICA EN LA UE	475
<i>Luis M. Uriarte Valiente</i>	
ESTADO ACTUAL DE LAS CONSECUENCIAS PROCESALES APLICABLES AL SISTEMA DE LÍMITE TEMPORAL DE LA FASE DE INSTRUCCIÓN	497
<i>Pablo Azaústre Ruiz</i>	
OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS DIGITALES DE PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN ENCRYPTADAS Y EL DERECHO DE DEFENSA	505
<i>Carmen Ladrón de Guevara Pascual</i>	
CIBERDELITOS DE ODIO Y MENORES: TIPOLOGÍA Y CONSECUENCIAS PROCESALES EN DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL DEL JUZGADO DE MENORES	517
<i>Fernando Martín Diz</i>	
LAS IMPLICACIONES DE LA DILIGENCIA DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO PENAL DE MENORES	525
<i>Paula Martínez Molares</i>	
DELITOS FANTASMAS TRAS LA PANTALLA: EL PELIGRO DE LAS REDES SOCIALES	537
<i>Mar Montón García</i>	
DEEPFAKES Y PROCESO JUDICIAL. UN DESAFÍO PROBATORIO EMERGENTE	549
<i>Ana María Neira Pena</i>	
LA PRUEBA PRECONSTITUÍDA DEL ARTÍCULO 449 TER LECRIM ANTE UNA NUEVA REALIDAD TECNOLÓGICA	561
<i>Blanca Otero Otero</i>	
ALGORITMOS CONTRA EL ODIO: DESAFÍOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INVESTIGACIÓN DE DISCURSOS Y DELITOS DE ODIO EN LÍNEA	575
<i>Irene Yáñez García-Bernalt</i>	

IV. PERSECUCIÓN PENAL DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA

JUSTICIA NEGOCIADA Y CONSENSUAL EN BRASIL: ORIGEN Y EVOLUCIÓN	591
<i>André Luiz de Almeida Mendonça</i>	
«LA PERSECUCIÓN PENAL DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA: EL PAPEL DE LA FISCALÍA EUROPEA»	627
<i>Serena Cacciatore</i>	
«DIVIDE ET IMPERA»: INSTRUMENTOS PROCESALES PARA POTENCIAR EL DILEMA DEL PRISIONERO EN LA PERSECUCIÓN DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA.	649
<i>Juan Carlos Ortiz-Pradillo</i>	
DESAFÍOS ESTRATÉGICOS EN LA LUCHA PENAL CONTRA LOS DELITOS ECONÓMICOS: REFLEXIONES Y APRENDIZAJES	683
<i>Nicolás Rodríguez-García</i>	
CLAVES FUNDAMENTALES PARA LA APLICACIÓN DEL DECOMISO SIN CONDENA EN LA RECIENTE DIRECTIVA 2024/1260, DE 24 DE ABRIL, SOBRE RECUPERACIÓN Y DECOMISO DE ACTIVOS.	729
<i>Miguel Álvarez Hernández</i>	
EL ENCUENTRO CONCRETO COMO PRESUPUESTO LEGITIMADOR DE LA DILIGENCIA DE CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES E IMÁGENES DEL INVESTIGADO	737
<i>Tomás Farto Piay</i>	
RECOMPENSAS FINANCIERAS A LOS INFORMANTES: ¿UN AVANCE EN EL MODELO DE WHISTLEBLOWING INCENTIVADO?	749
<i>Marina Oliveira Teixeira dos Santos</i>	
LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS CORPORATIVOS.	759
<i>Oliver Pascual Suaña</i>	
CANALES DE DENUNCIA Y JUSTICIA RESTAURATIVA: EXPLORANDO SINERGIAS DENTRO DEL SISTEMA PENAL.	769
<i>Selena Tierno Barrios</i>	

V. POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

«JUDICIALIÇÃO DA POLÍTICA» VERSUS «POLITIZAÇÃO DA JUSTIÇA»

Jorge Alves Costa

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA: UNA APROXIMACIÓN A PARTIR
DE ALGUNAS PREGUNTAS

Teresa Armenta Deu

POLÍTICA PROCESAL Y POLÍTICA EN EL PROCESO:
¿ES POSIBLE UNA TEORÍA PURA DEL DERECHO PROCESAL?

Juan Damián Moreno

LA POLITIZACIÓN DEL PROCESO

Víctor Moreno Catena

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA.
ASPECTOS RELEVANTES. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Juan Manuel Alonso Furelos

EL ARBITRAJE COMO VÍA DE DESPOLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA:
ALGUNOS PROBLEMAS PROBATORIOS

Joan Picó Junoy

A protecção dos vulneráveis no processo civil português: justiça inclusiva ou descompromisso com a inclusão?

Lurdes Varregoso Mesquita
Instituto Politécnico do Porto/ESTG
Universidade Portucalense e Instituto Jurídico Portucalense
mlcm@estg.ipp.pt; lvm@upt.pt

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. VULNERÁVEIS NO SISTEMA PROCESSUAL CIVIL PORTUGUÊS – ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E PRINCIPIOLÓGICO. 2.1. Vulnerável e vulnerabilidade(s) – aproximação ao(s) conceito(s). 2.2. Vulnerável processual – uma forma de vulnerabilidade (des)categorizada? 2.3. Compromisso da justiça com os vulneráveis no acesso à justiça – olhar sobre o quadro internacional. 2.4. Processo e vulneráveis – base principiológica no ordenamento interno português. 3. PROTECÇÃO DOS VULNERÁVEIS – ALGUNS CASOS NO ORDENAMENTO PORTUGUÊS. 3.1. Tutela dos cidadãos portadores de deficiência. 3.2. Protecção da vítima de violência doméstica enquanto parte vulnerável. 3.3. Vulneráveis e benefícios em matéria de custos na justiça. 3.4. Protecção da parte desacompanhada de mandatário judicial – o caso especial dos Julgados de Paz. 3.5. Vulneráveis e produção da prova – algumas prerrogativas. 3.6. Protecção dos vulneráveis na acção executiva para entrega do imóvel arrendado. 3.7. Meios alternativos de resolução de conflitos: uma via facilitadora e protectora para os vulneráveis. 4. CONSIDERAÇÃO DA VULNERABILIDADE, QUE FUTURO? A PROPÓSITO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 612/2019, DE 22 DE OUTUBRO. 5. NOTA FINAL. 6. BIBLIOGRAFIA.

1. Introdução

Os sinais de protecção da vulnerabilidade no sistema processual civil português são, ainda, quase irreconhecíveis e pouco reconhecidos. Há alguns, não muitos, mas precisam de maior visibilidade e expressão concreta. Com este trabalho, partindo do conceito de vulnerável e das dimensões da vulnerabilidade, pretende-se identificar o alinhamento do processo civil português com esta realidade, conhecendo os traços fundamentais da arquitectura processual civil que, na realidade actual e futura, seja capaz de exercer uma protecção eficaz e consciente daqueles que, por diferentes razões, se encontram inferiorizados ou marginalizados. Não pretendendo com isto fazer-se a apologia de um sistema excessivamente paternalista —que porventura pudesse criar desigualdade

em vez de promover a isonomia— a verdade é que os princípios da solidariedade e da proporcionalidade devem ocupar um espaço essencial no âmbito do processo civil, acompanhando os valores sociais de referência, *maxime da* igualdade. Porque é precisamente o princípio da igualdade que constitui o pilar de uma construção processual humanizada e humanizante, que se quer consciente da realidade social e sociológica em que se insere. Como assinalava SERRA DOMÍNGUEZ (*Jurisdicción*, 2008, 258-259),

«[l]a comprensión sociológica del proceso influye sobre las normas técnico-jurídicas del procedimiento, y éstas a vez influyen sobre aquellas. Muchas veces es preferible adoptar un procedimiento en teoría menos perfecto, pero adecuado a los elementos humanos que deben manejarlo, que un procedimiento ideal, pero de realización utópica».

Este rasgo de lucidez alerta-nos para a realidade viva do processo e mostra a necessidade de reescrever ou, pelo menos, de fazer uma releitura de base social dos institutos processuais básicos. Aliás, o processo civil revela a sua importância social quando actua em nome do direito de acesso à justiça. Em nome desse valor supremo e para salvaguarda do papel social do processo, as opções que se tomam no direito processual deixaram de ser puramente técnicas para serem acompanhadas de uma componente de justiça social, que visa atenuar as desigualdades na procura da justiça civil (SOUSA SANTOS, *Pela mão de Alice*, 1999, 146).

Qualquer destas tarefas sempre terá como ponto de partida o quadro constitucional, designadamente o princípio da igualdade e o direito fundamental da tutela judicial efectiva e do acesso à justiça. Daqui se partirá para a análise de alguns exemplos concretos e actuais de soluções processuais que têm em consideração a vulnerabilidade das partes ou do interveniente processual, conforme os casos. Por fim, numa breve alusão ao que nos pode reservar o futuro nesta matéria, reflecte-se, partindo de um caso jurisprudencial, sobre a consideração da vulnerabilidade no controlo da constitucionalidade normativa. Será um sinal para o futuro?

2. Vulneráveis no sistema processual civil português – enquadramento conceptual e principiológico

2.1. Vulnerável e vulnerabilidade(s) – aproximação ao(s) conceito(s)

Etimologicamente, a palavra vulnerável tem origem no latim *vulnerabilis*, que deriva de *vulnerare*, o que significa «ferir» ou «magoar», e este, por sua vez, provém de *vulnus*, que significa «ferida». Vulnerável é, assim, aquele que se

encontra sujeito a ser atacado, derrotado, prejudicado ou ofendido (HOUAISS, *Dicionário*, 2406). Partindo desta definição, ser (no sentido de estar) vulnerável é a condição daquele que se encontra em situação de risco ou de ser atacado; é aquele que tem uma situação fragilizada; é o que se apresenta em desvantagem perante outro ou em face de uma determinada realidade; é aquele que faz um esforço adicional para atingir um mesmo objectivo. Estas são algumas das situações que vulgarmente se associam ao vulnerável. Mas a que se deve essa condição? Qual a natureza dessa condição? Tem carácter temporário ou permanente? Ora, a resposta a estas questões poderá determinar a «catalogação» de diferentes tipos ou categorias de vulneráveis, sobretudo quando a respectiva condição tem, tendencialmente, carácter permanente e atinge um grupo de pessoas em idêntica condição.

Mas antes de tudo o mais, ser humano é ser vulnerável e ser vulnerável é humano. AMARTYA SEN (*A Ideia de Justiça*, 2010, 311-313) lembra que quando Sidarta Gautama, conhecido por Buddha, renunciou ao trono, o que o moveu foi a visão da mortalidade, da doença e das deformidades, assim como da ignorância com que se cruzava —ou seja, as privações e as inseguranças da vida humana— razão por que quis combater as causas do sofrimento humano e de todos os seres. Deste modo, continua a autora, em qualquer apreciação argumentativa do mundo em que vivemos é muito compreensível ter por referência a vida humana, desde logo pela sua condição e entorno, procurando sublinhar a relevância das vidas humanas no papel que a sociedade deve desempenhar e —acrescente-se— na justiça.

É evidente e aceite, nesse sentido, que todo o ser humano é vulnerável na sua essência e que a vulnerabilidade é percepcionada, desde logo, tomando por referência a condição da pessoa humana, isoladamente considerada. Mas, além disso, porque a pessoa vive em sociedade, o envolvimento político, económico e sócio-cultural proporciona outras formas de risco e ameaça. Existe assim, respectivamente, a vulnerabilidade antropológica, onde se enquadram as crianças, os idosos, as mulheres, as pessoas com deficiência, os doentes; e a vulnerabilidade sociopolítica, de que são exemplo as etnias, os desempregados, os refugiados, os consumidores, os imigrantes, as vítimas, as pessoas com carência económica, os infoexcluídos (LLUESMA VIDAL/PEYRÓ GREGORI, *Los Vulnerables*, 2024, 86). Os riscos e ameaças a que estamos sujeitos podem ter natureza intrínseca ou extrínseca à pessoa, podem resultar de causa natural, física ou psicológica, ou de razões socioculturais, o que diversifica as situações e dá origem à polissemia do conceito de vulnerável.

Por outro lado, também é inerente ao humano a sua solidariedade e nisso se deve basear a actuação do Estado, designadamente na sua função de adminis-

tração da justiça. IRENE VALLEJO (*O Futuro*, 2024, 16) mostra-nos, na crónica «Pré-história dos cuidados», que este sentimento é universal e intemporal. Assim nos conta:

«Os arqueólogos contemplam com crescente admiração a nossa pré-história. Entre os restos humanos de há duzentos mil anos, foram encontrados fósseis de adultos com malformações ósseas, surdez e outras anomalias graves. Como é que puderam sobreviver e até chegar a velhos? As análises revelam que, embora não pudessem participar nas caçadas, desfrutaram da mesma dieta carnívora dos outros e foram enterrados respeitosamente. Os especialistas concluíram que aqueles homínidos com deficiência receberam cuidados especiais desde a infância para que não ficassem para trás. Quando foi necessário, o grupo esforçou-se para compensar as suas diferenças e as suas necessidades. As interpretações mais duras da luta pela sobrevivência insistem na nossa natureza competitiva e nos comportamentos impiedosos. Mas estas descobertas pré-históricas demonstram que o desejo de protecção está connosco desde o início, mesmo nas épocas mais implacáveis. Dentro da tribo já existia a solidariedade para com os dependentes. Hoje, para além do acaso do nascimento, todos entrelaçamos as nossas vidas com um ser próximo remoto. O esforço coletivo para criar redes de apoio, que socorram estrangeiros e desconhecidos, não vai contra os nossos instintos, apenas os torna mais amplos. Porque, no clã alargado do mundo global, o outro também é um dos nossos.»

Aliás, como assinala FRANCESC TORRALBA (*Vulnerability*, 2023, 116), a vulnerabilidade é um factor de coesão social, na medida em que fomenta a criação de relações pessoais, promove a interajuda e é capaz de desenvolver aptidões colectivas que resolvem problemas e ultrapassam situações que transcendiriam as competências e a capacidade de resposta individual.

A necessidade de trabalhar o conceito tendo em conta a causa da vulnerabilidade, deu origem à criação e aceitação de grupos de vulneráveis, para efeitos de protecção e defesa dos direitos que, em várias dimensões, pudessem estar a ser postos em causa, em relação a esses grupos. Naturalmente, a concepção desta temática com base num modelo categórico, ou seja, em que a vulnerabilidade é associada a características ou grupos específicos, traz vantagens e desvantagens. Por um lado, o facto de existirem categorias, vistas como universais e estáticas, simplifica a identificação de quem precisa de protecção especial. Por outro, esse modelo acaba por ficcionar a inexistência do que acima já se deu por evidente —a vulnerabilidade de cada indivíduo, atendendo ao seu contexto, em concreto— que, por sua vez, podem não ficar sujeitos a nenhuma protecção especial, por não se enquadrarem em nenhuma categoria pré-definida. Precisamente por isso, tem sido assinalada a descategorização da vulnerabilidade, fenómeno a que também fazem referência MARIA JOSÉ CAPELO e MARIA VITÓRIA MOSMANN (*Direito Processual*, 2024, 360). Nesta linha, tem sido defendida uma análise individual e contextual da vulnerabilidade, reconhecen-

do que qualquer pessoa pode estar em situação de fragilidade em determinado momento ou em certas condições, independentemente do seu enquadramento em categorias. Ou seja, adoptar uma perspectiva mais ampla e flexível, que reconheça a vulnerabilidade como algo dinâmico e circunstancial. O que provocará, naturalmente, uma maior complexidade e dificuldade na concretização dos mecanismos de protecção.

2.2. Vulnerável processual – uma forma de vulnerabilidade (des) categorizada?

Não é difícil constatar que pode haver repercussão das «vulnerabilidades» no âmbito dos processos judiciais, no sentido de que as dificuldades e fraquezas reais da parte litigante —umas coincidentes com as causas de vulnerabilidade já acima apontadas, outras específicas da circunstância de a pessoa ser parte no processo— podem representar um reflexo negativo no âmbito das suas faculdades processuais, gerando desequilíbrio na posição das partes.

Podem levantar-se, a este propósito, várias questões. Deve haver discriminação positiva dos vulneráveis no âmbito de um processo judicial? Devem ser adoptadas medidas que permitam repor o equilíbrio entre as partes, no processo? Deve o legislador usar o processo como instrumento de protecção dos vulneráveis? A consideração da vulnerabilidade no processo resulta de um princípio geral? Pode o juiz, caso a caso, reequilibrar as partes? É necessário haver uma norma especial nesse sentido? Antes de procurar respostas, vejamos como tem sido analisada a vulnerabilidade processual.

TARTUCE (*Igualdade*, 2012, 184) define a vulnerabilidade processual como a «susceptibilidade do litigante que o impede de praticar os atos processuais em razão de uma limitação pessoal involuntária ensejada por fatores de saúde e/ou de ordem económica, informacional, técnica ou organizacional de carácter permanente ou provisório». Perante esta vulnerabilidade, a humanização do processo é um imperativo ético, através da ponderação desse elemento no sistema processual. Numa época marcada pela litigância de massa que reclama soluções massificadas, é importante não abandonar certos litigantes, que possam necessitar de um cuidado particular, em atenção à sua situação diferenciada, sobretudo quando esta lhe provoque dificuldades por obstáculos aos quais não deu causa (TARTUCE, *Igualdade*, 2012, 186-189).

Assumida a existência da vulnerabilidade processual, a identificação de causas objectivas dessa condição permitirá, sem prejuízo do que se salientou sobre a «pessoalização» da vulnerabilidade, afastar situações de subjectividade. Como

causas, têm sido apontadas, por exemplo: a insuficiência económica, as questões geográficas, os problemas de saúde físicos ou psicológicos, a falta de literacia, os obstáculos técnicos, os obstáculos organizacionais, a autorrepresentação. O que permite assinalar e tipificar alguns grupos de litigantes, algumas vezes atendendo também ao tipo de processo. Designadamente, os consumidores, as vítimas, os trabalhadores, os imigrantes, os refugiados, os desempregados.

Esta categorização facilita a protecção jurídica, em termos gerais e abstractos, mas na realidade, a relação entre vulnerabilidade e processo vai além disso. MARIA JOSÉ CAPELO e MARIA VITÓRIA MOSMANN (*Direito Processual*, 2024, 365-367) mostram três formas possíveis de relacionamento: sujeitos vulneráveis extraprocessuais/sujeitos vulneráveis processuais; sujeitos extraprocessuais vulneráveis/sujeitos vulneráveis não processuais; sujeitos processuais relacionais não vulneráveis/vulneráveis. Ou seja, casos em que o sujeito já se considera vulnerável fora do processo e essa condição é igualmente uma fragilidade no processo (por exemplo a mulher vítima de violência doméstica); casos em que o sujeito é vulnerável fora do contexto processual mas não é vulnerável no processo (por exemplo, a criança que é parte num processo mas que se encontra devidamente representada no processo e cujos representantes exercem correctamente os seus poderes de representação, sem pôr em causa os seus direitos; por fim, casos em que os sujeitos não são considerados vulneráveis fora do contexto processual mas essa vulnerabilidade surge com o processo e no processo, como sucede por exemplo num processo que tem por base um dano ambiental e no qual a parte demandante quer fazer valer os seus direitos e se vê confrontada com um réu «poderoso», que possui meios económicos e conhecimentos especializados, de onde se torna evidente a sua superioridade.

Em qualquer caso, o problema que se coloca em face das situações de vulnerabilidade intraprocessual, sejam elas uma extensão de uma vulnerabilidade extraprocessual, sejam elas uma contingência inerente e originada na própria relação jurídica processual, é o de saber se e como podem ser ultrapassadas essas situações e em que mecanismos se pode suportar a protecção dos vulneráveis, o que se verá mais adiante.

2.3. Compromisso da justiça com os vulneráveis no acesso à justiça – olhar sobre o quadro internacional

Os problemas relacionados com o acesso à justiça são problemas globais e constituem uma preocupação supranacional. Quando foi criada a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada em setembro de 2015 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, os Estados-Membros assumiram o

compromisso global para alcançar 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com vista a erradicar a pobreza, proteger o planeta e promover a paz e a prosperidade até 2030, orientada por princípios de inclusão, sustentabilidade e equidade. Neles se inclui o Objetivo 16, relativo à Paz, Justiça e Instituições Eficazes, que visa promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Uma das suas metas principais é garantir o acesso à justiça para todos, em especialmente combatendo as barreiras económicas, sociais ou legais que dificultem a igualdade perante a lei. Considerado um pilar essencial para a construção de sociedades mais equitativas, o acesso à justiça é um instrumento de garantia dos direitos fundamentais e proporciona a todos os cidadãos a oportunidade de defenderem os seus interesses.

Existe, assim, um consenso internacional no combate às desigualdades e uma das frentes desse combate é precisamente o acesso à justiça. O compromisso da Justiça com os vulneráveis é, por sua vez, a expressão concreta de uma batalha a travar por todos os Estados e por cada um, em particular. Nesta linha, em 2008 já tinham sido aprovadas, durante a XIV Cimeira Judicial Ibero-americana, as 100 Regras de Brasília sobre Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade¹ (doravante, abreviadamente, 100 Regras de Brasília), com o objectivo de garantir o acesso efetivo à justiça e promover a igualdade material no processo judicial. Designadamente, através de medidas que promovam a acessibilidade física e comunicacional, a assistência jurídica gratuita e a adaptação procedimental.

Não se afastando do que já se expôs, acima, sobre o conceito de vulnerável e situação de vulnerabilidade, as 100 Regras de Brasília definem o seu âmbito de aplicação e apresentam o conceito de pessoa (ou grupo) em situação de vulnerabilidade (secção 2.º, Regra 3 e 4,) com a afirmação de que:

«(3) Una persona o grupo de personas se encuentran en condición de vulnerabilidad, cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo, no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas, para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

En este contexto se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas quienes, por razón de su edad, género, orientación sexual e identidad de género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, o relacionadas con sus creencias y/o prácticas religiosas, o la ausencia de

1. Actualizadas em 2018, na Assembleia Plenária da XIX edição da Cimeira Judicial Ibero-Americana, realizada entre os dias 18 e 20 de abril de 2018, em São Francisco de Quito, no Equador.

estas encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

(4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, a otras diversidades étnicas-culturales, entre ellas las personas afrodescendientes, así como la victimización, la migración, la condición de refugio y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la orientación sexual e identidad de género y la privación de libertad.

La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico.»

A citada Regra 3, como justifica DELGADO MARTÍN (*Guía Comentada*, 2019, 22) desde a revisão de 2018 que não se limita a mencionar indivíduos, mas também faz referência a «grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade». Isso reflete uma crescente sensibilização para as barreiras ao acesso à justiça e ao exercício de direitos que não se manifestam apenas de forma individual, mas também em dimensões sociais ou coletivas. Assim, as dificuldades enfrentadas no acesso à justiça e na concretização de direitos são, em parte, consequência da pertença a grupos sociais vulneráveis, o que também tem reflexo noutros instrumentos internacionais, como a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das Suas Famílias e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Por sua vez, a Corte Interamericana de Derechos Humanos decidiu, no caso *Furlan y familiares v. Argentina*, de 31 de julho de 2012, que:

«[L]os menores de edad y las personas con discapacidad deben disfrutar de un verdadero acceso a la justicia y ser beneficiarios de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses» (párr. 268)²

Também no caso *Genie Lacayo v. Nicaragua*, de 29 de janeiro de 1997, a mesma Corte Internacional já tinha afirmado a dupla dimensão do direito de acesso à justiça, que não se esgota no direito a aceder a um tribunal, mas antes se completa com o direito a alcançar a justiça, ou seja, o direito ao Direito (PÉREZ CURCI, *Os Sistemas*, 2024, 609).

2. Disponível em <https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/2155>.

Mais recentemente, em 2023, a Conferência de Ministros da Justiça dos Países Iberoamericanos deu um passo de continuidade e fortalecimento do compromisso dos Estados iberoamericanos com a justiça inclusiva. Foi apresentado o Projecto de Convenção Iberoamericana de Acesso à Justiça, onde a comunidade internacional se pronuncia sobre a atenção a dar aos vulneráveis, a quem define como sendo «consideradas em condição de vulnerabilidade aquelas pessoas que, em razão da sua idade, sexo, orientação sexual e identidade de género, condição física ou mental, mobilidade ou circunstâncias sociais, económicas, étnicas e/ou culturais, ou circunstâncias relacionadas com as suas crenças e/ou práticas religiosas, ou com a ausência destas, encontram dificuldades particulares para exercer plenamente perante a justiça os direitos reconhecidos pela ordem jurídica». (cfr. art. 35.º do Projecto)

Esta Convenção, vindo a ser aprovada, representará, atendendo ao seu carácter vinculativo, a implementação e fortalecimento de políticas públicas que assegurem a inclusão e a proteção dos vulneráveis, pugnando por sistemas de assistência jurídica gratuita, pela capacitação de operadores do sistema de justiça e pela cooperação entre Estados, nestas matérias.

2.4. Processo e vulneráveis – base principiológica no ordenamento interno português

Começa-se por dizer que o ordenamento português não acomoda uma «cláusula geral de consideração da vulnerabilidade» no processo civil. Noutros ordenamentos, porém, como é o caso do ordenamento brasileiro, a doutrina admite, através do disposto no parágrafo único do artigo 190³, que o Código de Processo Civil de 2015 elevou a vulnerabilidade a uma categoria de critério discriminador genérico, o que justifica o tratamento diferenciado das partes (JÚLIO CAMARGO DE AZEVEDO, *Vulnerabilidade*, 2021, 139-140). Ou seja, a vulnerabilidade constitui uma questão preliminar, cumprindo ao juiz indagar, como questão prévia e incidental, se alguma parte se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade, o que justificará —a concluir-se pela existência de uma parte vulnerável— a adequação da técnica processual e do procedimento. E o autor argumenta que se há controlo dos negócios processuais, por maioria de razão deve ser assegurado, pelo juiz, o controlo das inadequações procedi-

3. Onde se diz, reproduzindo também o corpo da norma: «Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade».

mentais legislativas que não respeitem os interesses dos grupos vulneráveis (JÚLIO CAMARGO DE AZEVEDO, *ibidem*).

No ordenamento português, o enquadramento da consideração da vulnerabilidade tem de ser feito à luz do princípio da igualdade das partes. Este princípio é aceite como pilar do processo equitativo, conforme o art. 10.º da Declaração Universal dos Direitos do homem, o art. 6.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e o art. 47.º da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. No ordenamento português, a nível constitucional, a igualdade tem expressão no art. 13.º da Constituição da República Portuguesa⁴, e o processo equitativo no seu art. 20.º. Na lei ordinária, o art. 4.º do Código de Processo Civil Português (CPCP) consagra o princípio da igualdade, também designado princípio da igualdade de armas ou da paridade das partes, que impõe ao juiz uma actuação que proporcione o equilíbrio entre as partes, ao longo de todo o processo, nos direitos e nos deveres, nas prerrogativas e nas cominações. Este equilíbrio não é apenas de ordem formal, mas essencialmente substancial, exigindo sempre que a posição de cada uma das partes seja equiparável perante o processo. Nenhuma parte deve ser colocada em situação de desvantagem perante a parte contrária.

O respeito pela igualdade processual das partes impõe, assim, uma identidade de faculdades, de meios de defesa processuais, de sujeição a ónus e cominações idênticos; e, por outro lado, pressupõe uma equidistância jurisdicional. A igualdade de que aqui se fala aplica-se não só entre a parte e a contraparte, mas também entre as várias partes de um mesmo lado, quando há pluralidade de autores ou réus (litisconsórcio ou coligação). Esta matéria tem ainda acuidade no que respeita aos casos em que se encontram, a par, o Ministério Público e os particulares, assegurando que aquele não disponha de prerrogativas que a estes, eventualmente, não assistam.

A este propósito, é de salientar que a lei processual portuguesa consagra, desde a reforma de 95/96 e, mais aprofundadamente, desde o Código de Processo Civil de 2013, um paradigma processual assente no reforço dos poderes do juiz na direcção do processo, «concedendo-lhe o poder-dever de adoptar uma posição mais interventora no processo e funcionalmente dirigida à plena realização do fim deste»⁵. Por exemplo, o juiz tem o poder-dever de regularização da instância, no exercício dos poderes de gestão processual (art. 6.º e art. 590.º, n.º

4. Onde se lê: «1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.»

5. Cfr. exposição de motivos do DL n.º 329-A/95, de 12 de dezembro.

2, al. b), designadamente quando os articulados das partes apresentam insuficiências ou imprecisões na exposição ou concretização da matéria de facto alegada, devendo proferir despacho de convite ao aperfeiçoamento fixando prazo para a apresentação de articulado em que se complete ou corrija o inicialmente produzido (art. 590.º, n.º 4). Alguma doutrina associa este poder-dever como forma de protecção do princípio da igualdade substancial, como CASTRO MENDES e TEIXEIRA DE SOUSA (*Manual*, 2022, 101), ao afirmarem que «se o articulado de uma delas [ou seja, de uma das partes] for deficiente, o juiz, além de impedir a boa administração da justiça, infringe o princípio da igualdade substancial das partes se não a convidar a aperfeiçoá-lo». Os autores designam esta actuação como uma função assistencial ou auxiliar do juiz, com vista à correcção de desigualdades. LEBRE DE FREITAS e ISABEL ALEXANDRE (*Código*, 2014, 12) identificam neste poder-dever uma manifestação, sobretudo, do princípio da cooperação entre as partes e o tribunal, orientada para alcançar o objetivo principal do processo: garantir as condições necessárias para a prolação de uma decisão de mérito, que seria inviabilizada caso o vício não fosse corrigido.

Em qualquer caso, a reposição do equilíbrio de posições das partes não pode assentar numa postura excessivamente paternalista do juiz. Como explicam GERALDES, PIMENTA e SOUSA (*Código*, 2020, 24-25), a pretexto do princípio da igualdade não pode defender-se uma atitude que generalize o suprimento de falhas processuais imputáveis às partes. Consequentemente, é muito restrito o campo de actuação do juiz no ajustamento da igualdade substancial das partes, sobretudo limitado por normas imperativas com efeitos preclusivos; afirmam, até, ser frequente uma «efectiva e insuperável desigualdade (económica, cultural, social) dos litigantes» que os juízes não podem em concreto atenuar por conta dos padrões da imparcialidade e da equidistância do juiz, e da autorresponsabilidade das partes. Aliás, cumprindo o dever de imparcialidade previsto no art. 6.º-C do Estatuto dos Magistrados Judiciais (Lei n.º 21/85, de 30 de julho) «[o]s magistrados judiciais, no exercício das suas funções, devem agir com imparcialidade, assegurando a todos um tratamento igual e isento quanto aos interesses particulares e públicos que lhes cumpra dirimir».

Acresce, ainda, que tudo quanto se disse a propósito do princípio da igualdade é aplicável às partes, precisamente pela sua qualidade de parte processual, independentemente de poderem ser consideradas (ou não) uma pessoa vulnerável ou pertencente a um grupo vulnerável. Quer-se com isto dizer que, à luz dos princípios gerais de Direito Processual Civil português, o juiz não tem margem para actuar no sentido de repor o equilíbrio entre as partes, caso a caso, sem que essa actuação resulte de uma norma especial que o legitime. Apenas no pressuposto de que uma lei especial preveja a protecção da parte vulnerável, é que a correspondente actuação, se for o caso, poderá ter lugar.

Por fim, com respeito aos princípios de Direito Processual, cabe dizer que em 2019, através do Decreto-Lei n.º 97/2019, de 26 de julho foi introduzido o princípio da utilização de linguagem simples e clara (art. 9.º-A, do CPCP), o qual consagra a obrigação de utilização de linguagem facilmente perceptível em todos os actos de comunicação do tribunal, em nome do direito à informação e acesso à justiça. Está aqui uma medida que, reflexamente, acaba por reforçar a protecção dos vulneráveis, que o legislador justificou dizendo que «prevê-se pela primeira vez, tendo em vista aumentar a transparência e proximidade do sistema judicial, o princípio de utilização de linguagem clara pelos tribunais nas comunicações dirigidas a cidadãos e empresas» (cfr. Exposição de Motivos do citado Decreto-Lei n.º 97/2019). Não se pode dizer, em face desta explicação, que tenha sido uma medida pensada, em particular, nos vulneráveis, nem com a abrangência exigida por um verdadeiro e completo plano comunicacional, em particular à luz da Regra 8 das 100 Regras de Brasília⁶.

3. Protecção dos vulneráveis – alguns casos no ordenamento português

A protecção dos vulneráveis pode ter concretização em diferentes vertentes. Uma delas, como se viu, é na consagração de medidas que proporcionem, aos vulneráveis, o efectivo direito de acesso à justiça, nas suas várias manifestações; assim como, o direito fundamental a um processo equitativo, com respeito pela igualdade de armas. O direito de acesso à justiça congrega em si uma série de direitos, designadamente o direito à informação e consulta jurídicas; o direito de acesso aos tribunais, onde se inserem o direito de (ou à) acção, o direito a uma decisão em prazo razoável e o direito a um processo de execução. E, ainda, como garantia do exercício do direito de acesso aos tribunais a todos os indivíduos, independentemente da sua condição social e económica (em igualdade de oportunidades), o direito ao patrocínio judiciário (cfr. TEIXEIRA DE SOUSA, *Estudos*, 1997, 34). Tendo por base as 100 Regras de Brasília, o acesso à justiça, na sua dimensão coletiva, garante o efectivo e eficaz funcionamento do sistema jurídico e a coesão social, sendo visto como um serviço público centrado no cidadão. A boa administração da justiça é garantia de um Estado de Direito Democrático e permitirá reduzir desigualdades sociais, desde que sejam elimina-

6. A Regra 8 dispõe que: *Se establecerán las condiciones necesarias de accesibilidad para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen igualdad de trato, reconocimiento como persona ante la ley, respeto de su autonomía, capacidad de actuar, seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación, sea ésta a través de cualquier medio tecnológico que requiera, atendiendo la brecha digital y cultural. Se promoverá en los Poderes Judiciales la inclusión laboral de las personas con discapacidad.*

das barreiras jurídicas, sociais, económicas e culturais que dificultam o pleno exercício dos direitos (DELGADO MARTÍN, *Gula Comentada*, 2019, 12).

No já citado Projecto de Convenção Iberoamericana de Acesso à Justiça, é possível ter percepção das medidas de compromisso a criar e implementar para garantir a igualdade de acesso à justiça das pessoas e grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Dele resulta (cfr. art. 36.º do projecto) que os Estados devem adoptar medidas efetivas em casos de violência contra a mulher, estabelecendo mecanismos destinados a proteger os seus bens jurídicos, a sua integridade física e psicológica, bem como dos seus dependentes. Também é imperativo criar as medidas necessárias para que todas as crianças e adolescentes sejam objeto de tutela especial por parte dos órgãos do sistema de justiça, em atenção à sua autonomia progressiva, bem como para que prevaleça o interesse superior da criança e do adolescente na interação com o sistema de justiça. Em especial, os procedimentos com crianças e adolescentes devem ser realizados em espaços amigáveis para crianças, utilizando linguagem simples e evitando formalidades desnecessárias, incluindo a possibilidade de serem ouvidos sem estarem presentes na sala através da utilização de tecnologias de comunicação.

Procurando ter uma visão sistémica, a verdade é que a protecção dos vulneráveis encontra espaço para ser concretizada (e deve ser um objectivo a alcançar) tanto no acesso a um processo, como no decurso do processo e, ainda, na utilização do processo como instrumento nessa tarefa. Como se verá, de seguida, são diferentes as áreas e os contextos em que encontram expressão algumas formas de protecção dos vulneráveis. Porém, no caso português, as medidas adoptadas não parecem resultar de uma política coerente e estratégica, antes de medidas avulsas, que dificilmente determinarão um sistema consolidado.

3.1. Tutela dos cidadãos portadores de deficiência

A Constituição da República Portuguesa prevê, no seu artigo 71.º, n.º 1, que os *cidadãos portadores de deficiência física ou mental gozam plenamente dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição, com ressalva do exercício ou do cumprimento daqueles para os quais se encontrem incapacitados*. Por sua vez, de acordo com o n.º 2 da mesma disposição, o Estado obriga-se a *realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas famílias, a desenvolver uma pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade para com eles e a assumir o encargo da efectiva realização dos seus direitos, sem prejuízo dos direitos e deveres dos pais ou tutores*

Por outro lado, em 2009, Portugal ratificou a Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 56/2009, de 7 de maio, e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 71/2009, de 30 de julho). Porém, só mais tarde, com a aprovação da Lei 49/2018, de 14 de agosto, em vigor desde 11 de fevereiro de 2019, é que foram introduzidas as alterações que permitiram concretizar o espírito e as directrizes da Convenção de Nova Iorque, alterando o Código Civil, em matéria de capacidade civil, e o Código de Processo Civil, em particular criando o regime do maior acompanhado e o processo especial de acompanhamento de maior, este previsto nos artigos 891.º a 904.º do CPCP. Neste seguimento, foi consagrado um *modelo estrito em vez de um modelo regulamentar, inserindo alterações tanto quanto possível claras, simples e de fácil apreensão, não efetuando distinções nem fixando procedimentos excessivamente minuciosos que, não sendo estritamente indispensáveis, introduzem complexificações desnecessárias*⁷.

O legislador português abandonou o modelo dualista e consagrou o modelo monista, de acompanhamento e estrito, com vista a tornar o regime ágil e flexível. De acordo com a lei civil, aqueles que, sendo maiores, se encontrem impossibilitados, por razões de saúde, deficiência, ou pelo seu comportamento, de exercer, plena, pessoal e conscientemente, os seus direitos ou de, nos mesmos termos, cumprir os seus deveres, devem beneficiar das medidas de acompanhamento que venham a ser fixadas pelo tribunal e que melhor sejam adequadas à sua situação (art 138.º, do Código Civil). A sujeição da pessoa maior ao acompanhamento tem carácter supletivo, ou seja, por um lado, a medida de acompanhamento não tem lugar sempre que o seu objetivo se mostre garantido através dos deveres gerais de cooperação e de assistência que sejam aplicáveis ao caso concreto; e, caso a pessoa haja de ficar sujeita a uma medida de acompanhamento, esta deve ser adoptada de modo a assegurar o seu bem-estar, a sua recuperação, o pleno exercício de todos os seus direitos e o cumprimento dos seus deveres, salvo as exceções legais ou determinadas por sentença (art. 140.º do Código Civil).

Como se percebe, caso uma pessoa maior, sujeita a uma medida de acompanhamento, seja parte num processo com o devido acompanhamento, através do seu acompanhante, no exercício dos seus direitos processuais, estaremos perante uma das situações assinaladas como sendo a de um vulnerável extraprocessual que não é vulnerável processual. Considerando a tutela destas pessoas em ações judiciais, se a vulnerabilidade se encontra reconhecida e foram tomadas as medidas adequadas, a sua protecção está garantida através do

7. Cfr. Exposição de motivos da proposta de Lei n.º 110/XIII, p. 4.

acompanhante/curador ou mesmo pelo Estado, através do Ministério Público. Se, pelo contrário, a vulnerabilidade —no sentido de terem sido encontrados indícios de que se trata de cidadão portador de deficiência— é identificada ou suscitada ao longo do processo, o que deve acontecer, pela mão do próprio juiz, é ser ordenada uma perícia, para que, de forma segura, se confirme (ou não) essa suspeita. Caso se conclua afirmativamente, são anulados os actos já praticados e nomeado curador (art. 17.º, do CPCP). O juiz tem esse dever de declarar de forma clara que suspeita de alguma deficiência ou debilidade, não podendo, por si, assumir qualquer tipo de protecção da parte. Como já se disse, a equidistância e a imparcialidade impõem-se sempre, até nos processos de jurisdição voluntária, onde o juiz, mesmo actuando com mais poderes, quer de inquisitório, quer de gestão processual, deve pautar-se por uma actuação que sempre tem por limite a legalidade.

Caso se trate, eventualmente, de uma debilidade que não incapacite a parte, a situação já será diferente, devendo ser adoptadas medidas, por exemplo, que facilitem a comunicação e a compreensão, no âmbito do processo. Sucede, porém, que embora Portugal tenha ratificado a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, certo é que no domínio do acesso à justiça e aos Tribunais, nunca foram adoptadas medidas específicas nessa matéria. Contrariamente, por exemplo em Espanha, a Ley 8/2021, de 2 de junho, para «*el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica*», através da qual se alterou a legislação civil e processual civil espanholas, houve medidas concretas no que diz respeito ao acesso à justiça. Por exemplo, consta do preâmbulo do referido diploma, no ponto V, sobre a alteração à Ley de Enjuiciamiento Civil, que através do aditamento do artigo 7 bis⁸ ir-se-á regular «*las adaptaciones y ajustes en los procedimientos en que participen personas con discapacidad, con independencia de si lo hacen en calidad de parte o en*

8. Artículo 7 bis. (Ajustes para personas con discapacidad)

1. En los procesos en los que participen personas con discapacidad, se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad.

Dichas adaptaciones y ajustes se realizarán, tanto a petición de cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal, como de oficio por el propio Tribunal, y en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación. Las adaptaciones podrán venir referidas a la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno.

2. Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. A tal fin: a) Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil. Si fuera necesario, la comunicación también se hará a la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. b) Se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. c) Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida. d) La persona con discapacidad podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.

otra distinta y que se llevarán a cabo en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación. Adicionalmente, se menciona expresamente que se permitirá que la persona con discapacidad, si lo desea y a su costa, se valga de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste».

Esta figura do facilitador não tem paralelo no ordenamento português. Na verdade, no nosso ordenamento interno, no que respeita a medidas concretas, existem apenas afloramentos da tutela dos vulneráveis em matéria processual civil. Por exemplo, está prevista a possibilidade de nomeação de intérprete para estrangeiros e para surdos e mudos; e, bem assim, a formulação das perguntas/respostas por escrito ou oralmente, conforme o caso (art. 133.º e 135.º CPCP). No entanto, a lei é omissa quanto ao fornecimento de informações numa linguagem de fácil compreensão às pessoas com deficiência intelectual e/ou psicossocial e de documentos escritos em formatos acessíveis (como em Braille ou em modo de leitura fácil).

Embora no âmbito do Direito Penal e Processual Penal, as conclusões do projeto europeu ENABLE – «Permitir a inclusão e o acesso à justiça de arguidos com deficiência intelectual e/ou psicossocial»⁹, reflectem bem o atraso de Portugal nestas matérias. A saber, conforme consta do Relatório:

- O combate à discriminação enfrentada pelas pessoas com deficiência no acesso à justiça, através de medidas de disponibilização de adaptações processuais completas e de financiamento para a formação de pessoal judicial sobre a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, não tem sido uma prioridade nas políticas nacionais para a deficiência; como prova disso, a Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025 não apresenta medidas relativas a adaptações processuais para pessoas com deficiência intelectual e/ou psicossocial, por exemplo, que facilitem uma comunicação eficaz que assegure a compreensão dos seus direitos;
- Não se encontra prevista a possibilidade de um intermediário ou facilitador nos processos que envolvam pessoas com deficiência intelectual e/ou psicossocial com dificuldades de expressão ou com capacidade de compreensão diminuída; a lei não permite explicitamente que as pessoas com deficiência sejam acompanhadas por familiares, amigos ou outras pessoas que lhes prestem apoio emocional e moral em todas as fases do processo, se assim o desejarem;

9. O projecto foi desenvolvido pela Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social e envolveu, ainda, o estudo das realidades da Roménia, Bulgária, Chéquia, Eslovénia, Eslováquia, Espanha e Lituânia. O Relatório, de abril de 2023, está disponível em: https://www.fenacerci.pt/docs/ENABLE_Relatorio-Portugal-5.pdf.

- A lei é «omissa quanto ao fornecimento de informações numa linguagem de fácil compreensão às pessoas com deficiência intelectual», salientando que apenas estão previstas soluções no caso de pessoas com deficiência auditiva ou quando a pessoa tem uma deficiência ao nível da fala, em que é permitido que responda por escrito.
- Apesar de os juízes e procuradores entrevistados terem mencionado que «há um esforço para utilizar uma linguagem clara», o relatório refere que «estas decisões são tomadas individualmente, de acordo com o senso comum de cada profissional de justiça, sem procedimentos ou diretrizes definidas».

3.2. Protecção da vítima de violência doméstica enquanto parte vulnerável

O artigo 67.º-A, n.º 1, alínea a), do Código de Processo Penal Português define vítima como a «pessoa singular que sofreu um dano, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou psíquica, um dano emocional ou moral, ou um dano patrimonial, diretamente causado por ação ou omissão, no âmbito da prática de um crime». Na alínea b) dessa mesma disposição, o legislador refere-se à «vítima especialmente vulnerável» como sendo aquela «cuja especial fragilidade resulte, nomeadamente, da sua idade, do seu estado de saúde ou de deficiência, bem como do facto de o tipo, o grau e a duração da vitimização haver resultado em lesões com consequências graves no seu equilíbrio psicológico ou nas condições da sua integração social». Surge aqui, no âmbito do Direito Processual Penal, uma referência inédita a causas de vulnerabilidade, o que se faz a propósito de uma categoria de vulneráveis —as vítimas— que, por sua vez, podem ser duplamente vulneráveis. Às vítimas vulneráveis são reconhecidos direitos e protecção reforçada. Na Lei do Estatuto da Vítima (Lei n.º 130/2015, de 4 de setembro), há normas especiais que lhes reconhecem um estatuto próprio, com direitos próprios, podendo beneficiar, uma vez feita uma avaliação individual, de medidas especiais de protecção. As quais, nos termos do art. 21.º, n.º 2, do referido Estatuto, podem ser: as inquirições serem realizadas pela mesma pessoa, se a vítima assim o desejar, e desde que a tramitação do processo penal não seja prejudicada; a inquirição das vítimas de violência sexual, violência baseada no género ou violência em relações de intimidade, salvo se for efetuada por magistrado do Ministério Público ou por juiz, ser realizada por uma pessoa do mesmo sexo que a vítima, se esta assim o desejar e desde que a tramitação do processo penal não seja prejudicada; serem adoptadas medidas para evitar o contacto visual entre as vítimas e os arguidos, nomeadamente durante a prestação de depoimento, através do recurso a meios tecnológicos adequados; prestação de declarações para memória futura; exclusão da publicidade das audiências.

Feita esta menção à vítima no âmbito penal e, em particular, à *circunstância de estarem consagradas causas que tornam a vítima especialmente vulnerável*, o que nos importa destacar é se há alguns sinais de tutela das vítimas em sede de processo civil.

Neste contexto, encontram-se, efectivamente, algumas situações em que o processo civil serve de instrumento de tutela e se adapta com vista a proteger a vítima face ao agressor. São exemplos disso, dois casos em concreto: i) se a vítima de crime de violência doméstica for casada e vier a requerer o divórcio contra o cônjuge, sendo este arguido ou tendo sido este condenado pela prática desse crime, pode prescindir da tentativa de conciliação (art. 1779.º, n.º 2, do Código Civil Português); ii) a regulação ou alteração das responsabilidades parentais é promovida pelo Ministério Público, carácter urgente, em situações de violência doméstica ou outras formas de violência em contexto familiar, como maus tratos ou abuso sexual de crianças, sempre que seja decretada medida de coação ou aplicada pena acessória de proibição de contacto entre progenitores ou se estiver em grave risco os direitos e a segurança das vítimas (art. 44.º-A, do Regime Geral do Processo Tutelar Cível).

3.3. Vulneráveis e benefícios em matéria de custos na justiça

O legislador português tem também em atenção proteger os vulneráveis em matéria de custos na justiça, procurando que a sua situação de fragilidade não seja ainda mais castigada com a obrigação de pagar as despesas com a justiça. Nessa medida, criou alguns regimes que mostram um tratamento de discriminação positiva dos vulneráveis neste contexto. Por exemplo,

- relativamente às vítimas de violência doméstica, assim como às vítimas de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, está consagrada a presunção, até prova em contrário, de insuficiência económica para efeitos de apoio judiciário. Além disso, é garantida à vítima a célere e sequente concessão de apoio judiciário, com natureza urgente, assegurando-se de imediato o acesso a aconselhamento jurídico, tudo conforme o art. 8.º-C da Lei do Acesso ao Direito e aos Tribunais (Lei n.º 34/2004, de 29 de julho).
- em casos especiais, a lei prevê a isenção de custas processuais em atenção à vulnerabilidade da parte, como sucede com: i) os trabalhadores ou familiares, em matéria de direito do trabalho, quando sejam representados pelo Ministério Público ou pelos serviços jurídicos do sindicato, quando sejam gratuitos para o trabalhador, desde que o respectivo rendimento líquido à data da proposição da acção ou incidente ou, quando seja aplicável, à data do despedimento, não seja superior a 200 UC, quando te-

tenham recorrido previamente a uma estrutura de resolução de litígios, salvo no caso previsto no n.º 4 do artigo 437.º do Código do Trabalho e situações análogas; ii) os menores ou respectivos representantes legais, nos recursos de decisões relativas à aplicação, alteração ou cessação de medidas tutelares, aplicadas em processos de jurisdição de menores; iii) os incapazes, ausentes e incertos quando representados pelo Ministério Público ou por defensor oficioso, mesmo que os processos decorram nas Conservatórias de Registo Civil (cfr. art. 4.º, al. h), i) e l), do Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008 de 26 de fevereiro).

3.4. Protecção da parte desacompanhada de mandatário judicial – o caso especial dos Julgados de Paz

Em Portugal, ressalvados alguns casos especiais —onde as partes são obrigadas a constituir mandatário advogado independentemente do valor da causa (cfr. por exemplo os casos do art. 629.º, n.º 2 e 3, CPCP)— só nas causas de valor superior à alçada dos tribunais de primeira instância (actualmente fixado em cinco mil euros, pelo art. 44.º da Lei da Organização do Sistema Judiciário), porquanto são susceptíveis de recurso ordinário, é que é obrigatório as partes estarem assistidas por advogado. Caso contrário, podem pleitear por si, conforme resulta da conjugação dos artigos 40.º e 42.º do CPCP.

Ora, se as partes optam, podendo, por estar desacompanhadas de mandatário judicial, é inequívoca a sua vulnerabilidade técnica e pode até acrescer o desequilíbrio entre os litigantes se a outra parte, por sua vez, constituir mandatário. Nestes casos, em que a parte está desprovida de qualquer auxílio técnico, embora o faça por opção, na medida em que a lei o permita, não cabe ao juiz, naturalmente, substituir essa falta. No entanto, a este propósito, a lei processual prevê, no art. 40.º, n.º 3, que a inquirição das testemunhas seja efetuada pelo juiz, cabendo ainda a este adequar a tramitação processual às especificidades da situação. E é esta, apenas, a nota de protecção que a lei confere, sempre limitada pela imparcialidade do juiz, como já tivemos oportunidade de salientar.

Existe, no entanto, uma situação que merece uma referência particular, na medida em que apresenta contornos diferentes. Trata-se do regime de autorrepresentação vigente nos Julgados de Paz – um tribunal estadual mas não judicial, com competências para julgar determinadas causas, atenta a matéria, de valor até 15.000,00 euros, conforme o regime previsto na Lei dos Julgados de Paz (LJP), aprovada pela Lei n.º 78/2001, de 13 de julho. Tendo em conta as suas características e os princípios subjacentes ao seu funcionamen-

to, o legislador apenas obriga à constituição de mandatário em *casos excepcionais*. Prevalece a participação das partes, que se autorrepresentam e têm de comparecer pessoalmente, salvo na fase de recurso, em que é obrigatória a constituição de advogado (art. 38.º, n.º 1 e 3, da LJP). Sem prejuízo, a lei refere casos excepcionais em que obriga à assistência da parte, a saber: i) quando a parte seja analfabeta; ii) quando desconheça a língua portuguesa; iii) quando, por qualquer outro motivo, a parte se encontre numa posição de manifesta inferioridade, caso em que será o juiz de paz a apreciar, segundo o seu prudente juízo, a necessidade de assistência (art. 38.º, n.º 2, da LJP). Tem-se entendido que, quando a lei se refere a «assistência», não pretende com isso, necessariamente, a constituição de mandatário, bastando, se for o caso, que a parte seja auxiliada de modo a ultrapassar as dificuldades que exigem essa assistência, por exemplo, de leitura e escrita, no caso dos analfabetos, ou da língua, nos casos em que a parte não domine o português. Em particular nesta circunstância, a assistência adequada deve ser feita por tradutor, como aliás sucede nos actos processuais praticados nos tribunais judiciais (cfr. art. 133.º do CPCP).

Porém, o citado art. 38.º, n.º 2, no segmento que impõe ao juiz de paz o poder-dever de actuar no sentido de reequilibrar as partes, promovendo a sua assistência, caso conclua que uma delas se encontra em *posição de manifesta inferioridade* —por razões de ordem técnica ou de saúde, por exemplo— revela uma clara protecção da parte vulnerável. Neste caso, uma forma de criar equilíbrio será diligenciando a constituição de mandatário oficioso, não podendo o juiz ir mais longe na sua actuação, por tudo o que já se explicou sobre o papel do juiz. Foi isso que sucedeu, aliás, no processo n.º 723/2005-JP, que correu termos no Julgado de Paz de Vila Nova de Gaia, no qual, após a demandada ter sido citada, foi junto aos autos, pelo pai da demandada, um atestado médico que atestava tratar-se de uma pessoa com limitações psíquicas. Em face disso, o juiz do processo decidiu que, atenta a manifesta inferioridade da demandada, fosse esta notificada, nos termos no n.º 2 do art. 38º da Lei dos Julgados de Paz, para no prazo de 10 dias constituir advogado, advogado-estagiário ou solicitador (caso relatado por TÂNIA TAVARES RAMOS, *A Aceção*, 2017, 204-205). No mesmo sentido e com base na mesma disposição legal, no processo n.º 301/2016-JP, de acordo com decisão do Julgado de Paz do Funchal¹⁰, de 12 de setembro de 2017, o juiz de paz, após citação do demandado, tendo constatado que o mesmo não apresentou defesa e que era cidadão de nacionalidade estrangeira, ordenou que fosse nomeado defensor oficioso, considerado que o mesmo se encontrava em posição de manifesta inferioridade. Também no processo n.º 600/2013-JPSXL, conforme decisão do Julgado de Paz do

10. As decisões dos julgados de paz estão disponíveis em www.dgsi.pt.

Seixal, de 13 de outubro de 2014, numa acção em que se discutia a cobrança de rendas em matéria de arrendamento urbano, o juiz relata que «em sede de audição das partes e de tentativa de conciliação, constatou-se que o Demandado se encontrava numa posição de manifesta inferioridade, pelo que deveria obrigatoriamente encontrar-se assistido por mandatário, nos termos do disposto no artigo 38.º, n.º 2 da LJP. O Demandado declarou ter um advogado que poderia constituir como mandatário, sendo-lhe concedido o prazo até ao dia 26 de Fevereiro de 2014 para o fazer, data para a qual ficou desde logo agendada audiência». Não foi concretizada a razão pela qual o juiz entendeu tratar-se de parte em situação de inferioridade, mas a lei apenas impõe que o faça segundo o seu «prudente juízo».

O referido segmento do art. 38.º, n.º 2, da Lei dos Julgados de Paz é, em nosso entender, o exemplo da máxima protecção ao vulnerável intraprocessual, sem que se tenha de atender, necessariamente, a qualquer categorização.

3.5. Vulneráveis e produção da prova – algumas prerrogativas

A lei processual protege, ainda, aqueles que, por motivos de saúde, possam estar impossibilitados de comparecer, criando condições para que, sem prejuízo da produção de prova e em nome da descoberta da verdade, possam concretizar a sua participação sem prejuízo da sua condição mais debilitada e sem os onerar desproporcionadamente. Assim, a testemunha ou a parte, conforme se trate de prestar declarações ou de depoimento de parte, podem beneficiar de certas prerrogativas, designadamente, prestarem depoimento no local em que se encontrem ou, em certos casos, depor por escrito.

De acordo com o disposto no art. 457.º do CPCP, se a parte alega estar impossibilitada de comparecer no tribunal por motivo de doença, o juiz pode fazer verificar por médico de sua confiança a veracidade da alegação e, em caso afirmativo, a possibilidade de a parte depor. Havendo impossibilidade de comparecimento, mas não de prestação de depoimento, este realiza-se no dia, hora e local que o juiz designar, ouvido o médico assistente, se for necessário, sempre que não seja possível a sua prestação ao abrigo do disposto nos artigos 518.º (depoimento apresentado por escrito) e 520.º (comunicação direta do tribunal com o depoente).

Estes regimes de excepção representam uma preocupação com o equilíbrio entre a descoberta da verdade e a protecção das pessoas vulneráveis, em nome do objectivo ideal do processo.

3.6. Protecção dos vulneráveis na acção executiva para entrega do imóvel arrendado

A protecção dos vulneráveis assume particular relevância nas situações de execução para entrega de imóveis arrendados, sobretudo nas situações em que é necessário equilibrar o direito do exequente à entrega da coisa com a salvaguarda dos direitos fundamentais das pessoas que ocupam o imóvel, em especial quando se encontram em condições de fragilidade. O art. 863.º do CPCP, nos seus n.ºs 3, 4 e 5, revela bem este compromisso, estabelecendo mecanismos que permitem suspender a execução em casos de risco para a saúde ou a vida dos ocupantes.

O n.º 3 da citada disposição prevê que, no caso de arrendamentos habitacionais, o agente de execução deve suspender as diligências de entrega efectiva do arrendado quando seja apresentado um atestado médico fundamentado que demonstre que a desocupação e entrega coloca em risco a vida de uma pessoa presente no imóvel, devido a uma doença aguda, com indicação do prazo adequado para a suspensão. Este é um mecanismo de protecção imediata e eficaz dos ocupantes vulneráveis, assegurando o respeito pelo direito à saúde e à vida. Contudo, esta suspensão não é automática nem definitiva, sendo regulada pelo procedimento descrito no n.º 4. O agente de execução deve lavrar uma certidão da ocorrência e anexar os documentos apresentados. Além disso, deve informar a pessoa que ocupa o imóvel de que a suspensão só será mantida se, no prazo de 10 dias, for solicitado ao juiz a sua confirmação. Simultaneamente, o exequente ou o seu representante deve ser notificado desta situação. Por sua vez, o n.º 5 regula o papel do juiz neste processo, determinando que, após o impulso do executado requerente e ouvido o exequente, decidirá sobre a manutenção ou o levantamento da suspensão.

Está ainda previsto um outro mecanismo, que permite ao tribunal ponderar as condições específicas dos arrendatários e, quando justificável, adiar a desocupação, conforme resulta do art. 864.º, do CPCP, garantindo que a execução seja conduzida de forma compatível com os princípios da justiça social e da protecção dos mais frágeis, neste caso vulneráveis em ordem da sua saúde.

Assim, o executado, dentro do prazo de oposição à execução, pode requerer o diferimento da desocupação do imóvel por razões sociais imperiosas. Para tal, deve apresentar as provas disponíveis e indicar até três testemunhas. Ao tribunal cabe decidir, de acordo com o seu prudente arbítrio, considerando factores como a boa-fé, a inexistência de alternativa habitacional imediata, o número de pessoas que habitam no imóvel, a sua idade, estado de saúde e, de forma mais ampla, a sua situação económica e social. Porém, a concessão do diferi-

mento fica depende da verificação de um dos seguintes factores: i) falta de pagamento de rendas dever-se a carência económica do arrendatário, sendo esta presumida no caso de beneficiários de subsídio de desemprego de valor igual ou inferior à retribuição mínima mensal garantida, ou de rendimento social de inserção; ii) o arrendatário ser portador de deficiência com grau comprovado de incapacidade superior a 60%. No primeiro caso, se o diferimento for concedido, as rendas correspondentes ao período de adiamento devem ser pagas pelo Fundo de Socorro Social do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, como forma de protecção do senhorio.

Daqui resulta que o legislador incorporou a protecção dos arrendatários vulneráveis no âmbito da acção executiva para entrega do arrendado, através de mecanismos que conciliam a realização da justiça com a salvaguarda dos direitos fundamentais. Este regime reflete a preocupação com a humanização do processo civil, garantindo que a execução não se sobrepõe aos valores essenciais da dignidade humana e integra valores de justiça social.

3.7. Meios alternativos de resolução de conflitos: uma via facilitadora e protectora para os vulneráveis

Tomando como referência as regras 43 e 44 das 100 Regras de Brasília, os meios alternativos de resolução de conflitos (doravante, MASC) são uma via de resolução de conflitos favorável aos vulneráveis, na medida em que, de um modo geral, promovem o acesso à justiça, muito embora isso dependa também do mecanismo MASC que se pretende utilizar e do tipo de vulnerável em causa (exemplificando, um MASC online —vulgo ODR— não facilitará o acesso à justiça de um analfabeto digital ou de alguém que não tem/não usa internet).

Mas veja-se o que dizem as referidas regras:

(43) Se impulsarán los medios alternativos de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del Proceso como durante la tramitación del mismo.

Los medios alternativos de resolución de conflictos, deben integrarse en los servicios que las administraciones públicas han de ofrecer a las personas usuarias del sistema de justicia y en especial a las personas en condición de vulnerabilidad.

La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condición de vulnerabilidad, así como a optimizar el funcionamiento de los servicios formales de justicia.

(44) En todo caso, antes de utilizar una forma alternativa de solución en un conflicto concreto, se tomarán en consideración los derechos humanos de las personas intervinientes, así como las circunstancias particulares de cada una, especial-

mente si se encuentran en alguna de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad contempladas en estas Reglas.

Se fomentará la capacitación integral y sensibilización de las personas mediadoras, árbitros, facilitadoras judiciales comunitarias y demás personas que intervengan en la resolución del conflicto.

Especialmente importante resulta incluir formación en materia de derechos humanos, género, diversidad e interculturalidad.

No sistema português, os MASC são já uma realidade, na medida em que a arquitetura do sistema da justiça inclui, além dos tribunais, outros mecanismos auto e heterocompositivos de solução de conflitos, para além dos tribunais judiciais, incluindo mediação, conciliação e arbitragem. A própria lei constitucional prevê que a lei poderá institucionalizar instrumentos e formas de composição não jurisdicional de conflitos (art. 202.º, n.º 4, Constituição da República Portuguesa). A aposta nos MASC tem sido progressiva e vai-se consolidando, com incremento das ferramentas digitais ao serviço destes meios de resolução de conflitos. Recentemente, foi criada a Plataforma RAL+, que agrega, com acesso online e na mesma plataforma, os vários mecanismos a que o cidadão pode aceder por si e pela via digital. Inclui, neste momento, os julgados de paz e os sistemas públicos de mediação. Porém, só o combate à iliteracia digital, muitas vezes coincidente com outras categorias de vulneráveis, como sejam os idosos ou os analfabetos, permitirá alcançar resultados favoráveis nesta matéria.

Porém, o que importa aqui salientar de inovador são os casos em que o legislador mostrou uma maior protecção pela parte vulnerável, criando instrumentos que lhe permitem ter um maior domínio sobre a utilização dos MASC, sem que fiquem dependentes da vontade da outra parte.

Isto sucede, concretamente, nos litígios de consumo, onde o legislador, protegendo o consumidor —a parte vulnerável— consagra a arbitragem potestativa. Assim acontece nos litígios de consumo até 5.000 euros e, ainda, no âmbito dos serviços públicos essenciais¹¹, independentemente do valor, está consagrada a chamada arbitragem potestativa ou necessária. Isto é, se o consumidor optar pela resolução do litígio num tribunal arbitral de consumo, o agente económico tem, obrigatoriamente, de aderir (art. 14.º da Lei de Defesa do Consumidor e art. 15.º da Lei dos Serviços Públicos Essenciais).

Também os clientes bancários, na sua qualidade de consumidores especialmente vulneráveis perante a superioridade da parte contrária, mereceram uma

11. A saber: fornecimento de água; fornecimento de energia eléctrica; fornecimento de gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados; comunicações electrónicas; serviços postais; recolha e tratamento de águas residuais; gestão de resíduos sólidos urbanos; transporte de passageiros (art. 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho).

protecção adicional. Desde logo, surgindo dificuldades no cumprimento de contratos de crédito podem recorrer à Rede de Apoio ao Consumidor Endividado. E, por sua vez, as entidades bancárias são obrigadas a recorrer a meios extrajudiciais antes da cobrança pela via executiva aos credores consumidores, concretamente usando o Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento (PERSI). Aliás, os tribunais superiores têm decidido que se trata de um pressuposto processual (excepção dilatória inominada) quando o devedor é surpreendido com a acção executiva sem que a entidade bancária tenha tentado, anteriormente, a negociação. Assim foi decidido recentemente, dando continuidade à linha jurisprudencial prevalecente, que

«a inclusão de cliente bancário, consumidor, no PERSI é obrigatória nas situações previstas no art. 14.º n.º 2 do Decreto-Lei 227/2012, ficando a instituição de crédito proibida de, no seu decurso e até à extinção deste procedimento, agir judicialmente contra o cliente bancário com vista à recuperação do crédito, por o prévio cumprimento do PERSI ser condição de admissibilidade da acção (declarativa ou executiva). E que, «invocada a excepção dilatória inominada de falta de integração no PERSI, o ónus de alegação e prova dos factos respeitantes à integração do cliente bancário no PERSI e da sua extinção, cabe ao exequente embargado, constituindo a falta de demonstração destes requisitos uma excepção dilatória insuprível, de conhecimento oficioso» (cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 9 de maio de 2024, processo n.º 306/22.8T8CMN-A.G1, Relator José Cravo).

4. Consideração da vulnerabilidade, que futuro? A propósito do acórdão do tribunal constitucional 612/2019, de 22 de outubro

O Tribunal Constitucional tem sido muitas vezes confrontado com pedidos de fiscalização da constitucionalidade da norma de direito processual que admite a penhora do imóvel que constitui a habitação efectiva do executado, dentro das condições previstas no art. 751.º, n.º 3, do CPCP. Porém, esses pedidos não têm tido sucesso. Tomando como referência o Acórdão do Tribunal Constitucional 612/2019, de 22 de outubro¹² (doravante. Ac. TC 612/2019), nele ficou decidido:

«a) Não julgar inconstitucional a norma do artigo 751.º, n.º 3, alínea b), do Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, na sua redação originária, segundo a qual, ainda que não se adeque, por excesso, ao montante do crédito exequendo, é admissível a penhora do imóvel que seja habitação própria permanente do executado e sua família, mesmo que esse imóvel não tenha sido dado em garantia para o pagamento da dívida exequenda,

12. Disponível em <https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20190612.html?impressao=1>

quando esteja em causa uma dívida superior a metade do valor da alçada do tribunal de primeira instância e a penhora de outros bens presumivelmente não permita a satisfação integral do credor no prazo de dezoito meses; e, em consequência, b) Negar provimento ao recurso.»

Aparentemente, não se vê relação entre esta decisão e o tema dos vulneráveis. Porém, a declaração de voto vencida da Juíza Mariana Canotilho, ao discordar da ponderação de bens e direitos fundamentais em que se baseou a decisão, porquanto a aplicação da norma tem como consequência, uma vez percorridos os trâmites do processo —ou seja, penhora e venda— «deixar sem casa oito pessoas, em situação de comprovada fragilidade económica, incluindo menores, para liquidação de uma dívida de 28.427,63 Euros, com origem num crédito pessoal de 27.778,85 Euros, concedido por uma instituição bancária», conduz-nos precisamente a esse assunto. Entendendo que não foi feita uma ponderação proporcional, nem conforme à Constituição, apresenta-nos uma reflexão sobre a consideração da vulnerabilidade no método interpretativo de apreciação da constitucionalidade das normas. Que se julga muito pertinente como sinal de uma eventual evolução no sentido da ponderação do direito à protecção dos vulneráveis.

Considerando que a decisão em apreço coloca a questão da constitucionalidade, no caso, como um conflito entre os direitos de propriedade do devedor (sobre o imóvel) e do credor (sobre o montante da dívida), prevalecendo o direito deste último, o Tribunal Constitucional entendeu que a norma não constitui uma afetação arbitrária do direito de propriedade do devedor, tendo em conta o correspondente direito do credor a ver satisfeito o seu crédito. Mais sustenta, que embora a circunstância de o imóvel penhorado constituir a habitação do executado seja um elemento merecedor de ponderação, a verdade é que tal facto não foi desconsiderado pelo legislador na solução encontrada no art. 751.º, n.º 3.

Por sua vez, Mariana Canotilho entende que estamos na presença de um conflito mais complexo de direitos fundamentais e acrescenta outros conflitos a ponderar: i) conflito de consumo entre o direito do credor (um Banco) e o direito à protecção do consumidor do devedor (nos termos do n.º 1 do art. 60.º da CRP); ii) o conflito entre o direito de propriedade do credor e o direito à habitação (consagrado no n.º 1 do art. 65.º da CRP) de todas as oito pessoas que residem, comprovadamente, no imóvel a penhorar; iii) o conflito entre o direito de propriedade do credor e as obrigações especiais de protecção, quer dos menores, quer das famílias em situação de especial fragilidade social e económica, que se impõem ao Estado, em virtude de disposições constitucionais (designadamente, as constantes da alínea d) do art. 9.º, da alínea a) do n.º 2 do art. 67.º e do n.º 1 do art. 69.º), e que não podem deixar de ser levadas em conta pelo legis-

lador (conforme consta do voto vencido do Ac. TC 612/2019, já citado). E conclui, a propósito do terceiro conflito de direitos fundamentais assinalado, que competindo ao Estado «promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais e impõe a especial proteção de certas categorias, em especial dos menores e das famílias em situação de especial fragilidade social e económica», devem ser atendidos estes interesses.

A decisão em análise evidencia que a proteção dos sujeitos vulneráveis é apontada como indispensável e essencial na ponderação de qualquer conflito de direitos fundamentais. O legislador, nas soluções que encontrar não pode restringir os direitos dos sujeitos vulneráveis, antes deve procurar acomodar soluções que tenham em conta, precisamente, as suas necessidades especiais de proteção.

E com isto, acabamos por regressar à igualdade. É que a inclusão da vulnerabilidade como elemento relevante no método de interpretação constitucional conduzirá a soluções mais eficazes, que promovem, efectivamente, o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, enquanto tarefa fundamental do Estado (art. 9.º, al. d), da Constituição da República Portuguesa (Mariana Canotilho, A vulnerabilidade, 2022, 160).

Estamos em crer que a protecção dos vulneráveis ganhará relevância, no futuro, como fica evidenciado nas preocupações e considerações aqui expostas.

5. Nota final

Adoptar um conceito suficientemente abrangente de vulnerável, que permita a sua identificação, assim como categorizar e/ou descategorizar esse conceito, são tarefas e opções complexas, que bem evidenciam a dificuldade em garantir que as normas e práticas processuais civis respondem de forma efetiva à protecção dos vulneráveis.

No contexto internacional, os Estados estão empenhados em reforçar a necessidade de protecção dos vulneráveis, existindo marcos significativos nesse compromisso, que mostram uma tendência global para o reconhecimento da vulnerabilidade como um critério central na promoção de uma justiça equitativa e acessível. No sistema jurídico português, por sua vez, embora existam alguns mecanismos que visam proteger os vulneráveis, estes são dispersos e não reflectem uma abordagem sistemática e transversal da matéria. O des-

comprometimento com a inclusão não é total, mas ainda não se pode afirmar a existência de uma verdadeira justiça inclusiva.

A justiça inclusiva exige um reforço das medidas de acesso à justiça, campo em que o processo tem um papel fundamental, mas também uma mudança de paradigma na interpretação e aplicação das regras processuais, num jogo de equilíbrio (difícil) entre as partes, em busca da igualdade substancial. A adesão aos instrumentos de Direito Internacional constitui um catalisador importante neste propósito, desde que o Estado português seja capaz de introduzir, em coerência sistemática com os princípios basilares do processo civil, as medidas concretizadoras das actuais directrizes internacionais em matéria de protecção dos vulneráveis.

Por outro lado, uma maior integração da vulnerabilidade como critério relevante na interpretação das normas processuais e na avaliação da sua conformidade constitucional será um passo importante. Este caminho é essencial para consolidar a protecção dos vulneráveis como um princípio jurídico de destaque, alinhado com os valores constitucionais de dignidade humana, igualdade e efectivo acesso à justiça.

6. Bibliografia

- AZEVEDO, Júlio Camargo de, *Vulnerabilidade: critério para adequação procedimental – a adaptação do procedimento como garantia ao acesso à justiça de sujeitos vulneráveis*. Editora CEI, Belo Horizonte, 2021.
- CANOTILHO, MARIANA. «A vulnerabilidade como conceito constitucional: Um elemento para a construção de um constitucionalismo comum». *Oñati Socio-Legal Series*, vol. 12, n.º 1, 2022, pp. 138-163.
- CAPELO, Maria José/MOSMANN, Maria Vitória. «Direito Processual e Sujeitos Vulneráveis (um olhar comparativo entre os ordenamentos da Argentina e Portugal)», *Revista Eletrônica De Direito Processual*, v. 25, n.º 1, 2024, pp. 360-382.
- DELGADO MARTÍN, Joaquín. *Guía comentada de las Reglas de Brasilia. Comentarios a las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad*. Programa EUROsocial, Madrid, 2019.
- FREITAS, José Lebre de. *Introdução ao Processo Civil*. Gestlegal, Coimbra, 2023.
- FREITAS, José Lebre de/ALEXANDRE, Isabel, *Código de Processo Civil Anotado*. Vol. 1.º. Coimbra Editora, Coimbra, 2014.
- GERALDES, A. S. Abrantes/PIMENTA, Paulo/SOUSA, Luís Pires de. *Código de Processo Civil Anotado*. Vol. I. Almedina, Coimbra, 2020.
- HOUAISS, Antônio. *Dicionário Português Atual*. Círculo de Leitores, Lisboa, 2011.
- LLUESMA VIDA, Marta / PEYRÓ GREGORI, Loreto. «La fragilidad y la vulnerabilidad en el anciano: un abordaje clínico y psicosocial», a: GRANDE ARANDA, Juan Ignacio (Ed.), *Los Vulnerables. Estudios interdisciplinares sobre la vulnerabilidad*, Tirant Humanidades, Valencia, 2024, pp. 83-100.

- MENDES, João de Castro/ SOUSA, Miguel Teixeira de. *Manual de Processo Civil*. Vol. I. AAADL, Lisboa, 2022.
- OTEIZA, EDUARDO/MOSMANN, MARÍA VICTORIA. «Tutela judicial efectiva: principio y derecho». *Civil Procedure Review*, v. 12. N.º 2021, 157-171.
- PÉREZ CURCI, Juan Ignacio. «El derecho fundamental de acceso a la justicia en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos», a: ALMEIDA, Susana/ROUSSET, Andrés (Coord.), *Os sistemas europeus e interamericano de protecção dos Direitos Humanos: uma leitura comparada*. Madrid, Aranzadi, 2024.
- RAMOS, Tânia Tavares, «A Aceção da Vulnerabilidade no Processo Civil», *Revista Julgar*, n.º 31, 2017. Disponível em <http://julgar.pt/a-acecao-da-vulnerabilidade-noprocesso-civil/>
- SANTOS, Boaventura de Sousa. *Pela Mão de Alice. O Social e o Político na Pós-Modernidade*. Edições Afrontamento, Porto, 1999.
- SEN, Amartya. *A Ideia de Justiça*. Almedina, Coimbra, 2010.
- SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel. *Jurisdicción, Acción y Proceso*. Atelier, Barcelona, 2008.
- SOUSA, Miguel Teixeira de. *Estudos sobre o novo processo civil*. Lex, Lisboa, 1997.
- TARTUCE, Fernanda. *Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil*. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2012.
- TORRALBA, Francesc. «Human Beings Confronting their Vulnerability», a: PUYOL MONTERO, José Maria (Coord.), *Vulnerability and Rights*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pp. 101-116.
- VALLEJO, Irene. *O Futuro Recordado*. Bertrand Editora, Lisboa, 2024.